

Gaceta de Puerto-Rico.

SE PUBLICA

Todos los Mártes, Juéves y Sábados.



SE SUSCRIBE

En la Imprenta de Gobierno. — Fortaleza 21.

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO.

Año 1888.

JUEVES 26 DE JULIO

Número 89.

PARTE OFICIAL

GOBIERNO GENERAL

DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

SECRETARIA.

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, bajo el número 308 y con fecha 16 de Mayo último, dirige á este Gobierno General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—Visto el expediente promovido con motivo de solicitar la Audiencia de Cebú el nombramiento de Auditores para que por aquella se resuelvan los conflictos de jurisdicción, y lo expuesto por la de Manila atribuyéndose el conocimiento de dichos conflictos según lo dispuesto en la Real orden de 6 de Noviembre de 1882.—Vista esta disposición, la de 6 de Agosto de 1883 y el Real Decreto de 4 de Noviembre de 1879:—Visto lo informado por el Ministerio de la Guerra en Real orden de 23 de Setiembre último, sobre que la plantilla del Cuerpo jurídico Militar fué modificada por Real orden de 2 de Octubre de 1885 aumentándose el personal en Filipinas: que estaba subsistente la Real orden de 6 de Agosto de 1883 en cuanto no se oponga á ella la Ley de 10 de Marzo de 1884 y vigente en cuanto estableció las Auditorías en Santiago de Cuba y Puerto-Príncipe: que conceptuaba conveniente que del personal de plantilla de Filipinas se destinase un Auditor de Distrito á la Capital de las Vivayas quedando en Manila un Auditor general.—Vistas las varias consultas hechas por la referida Audiencia de Cebú sobre la dificultad de resolver los conflictos jurisdiccionales:—Visto lo informado por el Tribunal Supremo:—Considerando que la causa de las dificultades surgidas en la resolución de los expresados conflictos, procede la creación de nuevas Audiencias en parte del territorio de las antiguas, rigiéndose todas por las mismas Leyes y análogas Ordenanzas, y siendo iguales en atribuciones pero distintas la importancia de las Capitales y de las Autoridades que en ellas residen:—Considerando que la resolución que sobre este punto se adopte tiene que ser de carácter general por que las dificultades surgidas, lo mismo han sido en Cuba que en Filipinas:—Considerando que según el Real Decreto de 4 de Noviembre de 1879, después de suprimidas las Salas de Guerra y Marina de las Audiencias de Ultramar por el Real Decreto de 22 de Febrero de 1878 y con motivo de suscitarse dudas acerca de quien había de resolver los conflictos jurisdiccionales entre los Tribunales del mismo ó de distinto fuero y puestos de acuerdo este Ministerio y los de Guerra y Marina se dictaron reglas para el mencionado objeto, atribuyéndose el conocimiento expresado á la Sala de lo Civil en las Audiencias de la Habana y Manila y á las de Puerto-Rico y Puerto-Príncipe, únicas que en aquella época existían:—Considerando que creada con posterioridad la de Cebú, se han asignado en esta las dificultades que se presentaron en la de Puerto-Príncipe y por las mismas causas, exigiendo una resolución para evitar que se reproduzcan:—Considerando que para cumplir lo dispuesto en el Real Decreto de 4 de Noviembre de 1879 es preciso que en el territorio de cada Audiencia exista el personal Jurídico Militar necesario para formar Sala: y en tal concepto es de estimar lo informado a este fin por el Tribunal Supremo de que por la falta del expresado personal, entiendan en los expresados conflictos las Audiencias de la Habana en la Isla de Cuba, y la de Manila en el Archipiélago Filipino:—Considerando que el que de la resolución de las competencias y conflictos jurisdiccionales conozcan determinadas Audiencias no es hacer las superiores gerárquicas de otras ni lastima la jurisdicción y atribuciones de estas:—Considerando que existiendo Auditor de Guerra en Puerto-Rico y aumentado el

personal Jurídico en Filipinas puede haberlo en Cebú y en tal caso poderse conocer por estas Audiencias de casos de competencia de las que se trata, sia que tengan que someter las cuestiones á otras Audiencias que en su Capital resida quien represente el fuero respectivo:—Considerando que de no existir Auditores de Guerra y Marina en cualquier Capital de Audiencia y dependiendo esto de las economías que hicieron los Ministerios podría resentirse de estas vicisitudes la Administración de Justicia.—En su virtud oída la Sección de Ultramar del Consejo de Estado y de conformidad con su dictamen; S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino se ha servido resolver, que por excepción y cuando haya en la Capital Auditores puedan conocer de los conflictos de jurisdicción las Audiencias de Puerto-Rico y Cebú y cuando nó, la facultad de entender en la resolución de las competencias que ocurran entre la jurisdicción ordinaria y las de Guerra y Marina será de la Audiencia de la Habana en la Isla de Cuba y de la de Manila en Filipinas.—De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.”

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 21 del pasado mes, de su orden Superior se publica en la GACETA OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, 23 de Julio de 1888.—El Secretario del Gobierno General, *Fernando Frago*. [1948]

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, bajo el número 197 y con fecha 3 de Abril último, comunica á este Gobierno General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.:—Con esta fecha digo al Director general de Gracia y Justicia de este Ministerio lo siguiente:—Ilmo. Sr.:—Visto el expediente de oposiciones á la Notaría de Holguín remitido por el Presidente de la Audiencia de Puerto-Príncipe en 10 de Noviembre próximo pasado cuyo expediente fué reclamado por este Ministerio por Real orden de 27 de Octubre anterior para examinar los antecedentes que sirvieron para admitir á dichas oposiciones á Don Emiliano Espinosa; resultando de dicho expediente que éste solicitó tomar parte en las oposiciones dentro del plazo de la convocatoria manifestando ser Notario de Indias con Real Fiat y estar comprendido en la Ley del Notariado en su Reglamento y en la Real orden de 17 de Julio de 1885 á cuyos efectos acompañó los títulos provisional y definitivo de Administrador de la Escribanía de Holguín que perteneció á Don Pedro Perfecto Lacoste y varias certificaciones acreditando su examen y juramento ante la Audiencia para desempeñar el cargo anterior, que desempeñó este cargo y el de Escribano desde 23 de Octubre de 1874 hasta el 8 de Febrero de 1884, que no fué procesado ni es deudor á fondos públicos, que no padece enfermedad ni tiene defecto físico y que verificados los ejercicios fué aprobado por el Tribunal:—Considerando que Don Emiliano Espinosa habiendo desempeñado la Escribanía pública de Holguín después de la promulgación de la Ley del Notariado de la Isla de Cuba, pero en virtud de expediente promovido con anterioridad á dicha promulgación, circunstancia que le equiparan con los que ejercían según los preceptos de la legislación antigua y practicado su examen ante la Audiencia del territorio con Fiat de Notario Real y público como Administrador del expresado oficio se hallaba en condiciones para volver al ejercicio del Notariado mediante oposición conforme á la Ley:—Considerando que reúne los demás requisitos que exigen los artículos 10 de la Ley, 5º del Reglamento y Real orden de 17 de Julio de 1885; S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Sección de Ultramar del Consejo de Estado, ha tenido á bien confirmar la Real orden de 6 de Setiembre último por lo que se nombró á Don Emiliano Espinosa y Aguilera para la Notaría de Holguín, como propuesto por el Tribunal de oposiciones de Puerto-Príncipe, y disponer que la Real orden de 17 de Julio de 1885 se amplíe en el concepto de que todas las que á la publicación de la

Ley del Notariado desempeñaban ó habían desempeñado oficios de la fé pública extrajudicial en virtud de examen ante las Audiencias y con el Fiat de Notarios públicos y Reales ó de Indias que como propietarios, ya como servidores de los mismos oficios así como las que reúnan dichas circunstancias con posterioridad á la promulgación de la Ley en virtud de expedientes promovidos con anterioridad y que habian de resolverse con arreglo á las Leyes y disposiciones vigentes al tiempo en que se promovieron, han estado y están en aptitud de volver á ejercer las funciones del Notariado mediante oposición conforme á dicha Ley.—Lo que de la propia Real orden, traslado á V. E. para su conocimiento y demás efectos.”

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 24 de Abril último, de su orden Superior se publica en la GACETA OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, 23 de Julio de 1888.—El Secretario del Gobierno General, *Fernando Frago*. [1949]

NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CIVILES, MONTES Y MINAS

FERRO-CARRILES DE INTERÉS GENERAL.

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar comunica á este Gobierno General con fecha 8 del mes próximo pasado y bajo el número 340, la Real orden que sigue:

“Excmo. Sr.:—Vista la instancia de 28 de Mayo último, elevada á este Ministerio por Don Ibo Bosch y Puig, concesionario de los ferro-carriles de San Juan de Puerto-Rico á Mayagüez por Arecibo y Aguadilla; de Rio-piedras á Humacao por Fajardo; de Ponce á Mayagüez por San Germán; de Ponce á Humacao por Arroyo y de Caguas á Humacao por Juncos, de esa Isla, y por Don José Carvajal y Don Pablo Bosch representantes de la Compañía titulada: *Compañía de los ferro-carriles de Puerto-Rico*, en solicitud de que se autorice por el Ministerio de Ultramar la transferencia que el primero de los firmantes hace á la Compañía indicada de los ferro-carriles de que se trata.—Resultando que en la referida instancia manifiestan haber trasferido Don Ibo Bosch á la Compañía citada la concesión de los expresados ferro-carriles, y que esta se subroga en todos los derechos y obligaciones.—Resultando que Don Ibo Bosch y Puig tiene como concesionario, con arreglo al artículo 21 de la Ley de ferro-carriles de la Península, vigente en esa Isla, el perfecto derecho de trasferir la concesión á quien estime conveniente, siempre que el adquirente quede obligado en los mismos términos y con las mismas garantías al cumplimiento de las condiciones estipuladas, previa autorización del Gobierno.—Resultando que el Consejo de Administración de la Compañía de los ferro-carriles de Puerto-Rico en sesión de 17 de Mayo último, acordó que en unión de Don Ibo Bosch solicitase la Compañía la aprobación de la transferencia que aquél ha hecho á ésta de la concesión de los ferro-carriles de Puerto-Rico, designando á los Consejeros Don José Carvajal y Don Pablo Bosch para que suscriban el oportuno documento en representación de la Compañía, según aparece de la certificación del acta correspondiente, expedida por el Secretario del expresado Consejo, con el Visto Bueno del Presidente del mismo, cuyo acuerdo es válido según las bases y estatutos de la Sociedad, de lo que dá fé el Notario público del Distrito de esta Capital Don José García Lastra, en testimonio de 4 del corriente mes, que consta en el expediente respectivo.—Resultando que la Compañía de que se trata tiene personalidad jurídica constituida con arreglo á las disposiciones y requisitos legales, según testimonio del referido Notario Don José García Lastra.—Resultando que en la escritura de transferencia consta que la Compañía se subroga en un todo de los derechos y obligaciones y compromisos inherentes á Don Ibo Bosch y Puig, como concesionario.—Visto el artículo 21 de la Ley de ferro-carriles de la Península de 23 de Noviembre de 1877 hecha extensiva á esa Isla por Real Decreto de 9 de Diciembre de 1887.—Visto el artículo 21 del Código de comercio